

Dictadura militar en Argentina: la utilización de sondeos y encuestas de opinión como parte de la estrategia comunicacional del Gobierno del general Viola (1981)*

Laura SCHENQUER
CONICET/Universidad Nacional del Litoral

Julia RISLER
Universidad de Buenos Aires

Existe un acuerdo bastante generalizado respecto a que el proceso de transición argentina comenzó en 1982, con la derrota en la Guerra de Malvinas. No obstante, hay autores que plantean que si la transición se comprende como un proceso que se inicia con una fase de descomposición del régimen autoritario: entonces 1981 puede ser considerado como el año en el que comienza a acelerarse la crisis de la última dictadura argentina¹. El general Roberto E. Viola, que sucedió en la presidencia al general Jorge R. Videla, recibió un régimen deslegitimado que había incumplido con casi todos los objetivos trazados al comienzo de la dictadura (con excepción del *exterminio de la subversión*), y en el cual los grupos de poder que habían sido aliados –como la Iglesia católica– comenzaban a marcar su distanciamiento, al mismo tiempo que sindicatos de trabajadores y partidos políticos recuperaban su rol de intermediarios, y en especial los organismos de derechos humanos lograban que cobrase visibilidad su reclamo de “aparición con vida”².

En este contexto de crisis, el fin de la dictadura parecía una realidad cada vez más cercana, pese a que el régimen se preparaba para permanecer hasta por lo menos alcanzar una salida acordada o transición pactada. Mientras la sociedad reclamaba mayor apertura política y reordenamiento de la economía, ciertos sectores dentro de las Fuerzas Armadas (FFAA) se oponían rotundamente a dar por finalizada la etapa dictatorial y a que se convocara a elecciones. En este marco de posiciones contradictorias, es posible situar la llegada de Viola al poder y estudiar su estrategia *moderada* por medio de la cual intentó mantener un equilibrio entre esos reclamos y que, pese a haber fracasado (Viola debió renunciar a pocos meses de asumida la



Artículo recibido el 8-9-2018 y admitido a publicación el 19-11-2018.

*. Agradecemos a Silvia JURGIEL el dato y las fotos de la revista *Gente* aquí analizadas, las cuales surgen del archivo que constituyó para la investigación de su tesina (“El rol de la revista *Gente* en la difusión del discurso moral de la última dictadura cívico militar durante su etapa inicial (1976-1978”, tesis de licenciatura, Universidad de Buenos Aires, 2015).

1. Ver detalles de esta discusión más adelante.

2. Pese a que la desaparición forzada de personas era una práctica represiva sistemática realizada por las Fuerzas Armadas o la policía (secuestro seguido de encarcelamiento en centros ilegales, tortura y asesinato en la mayor parte de los casos, y desaparición de los cuerpos), el Estado negaba su responsabilidad. Tanto los afectados en forma directa (los familiares) como indirecta (miembros de la sociedad en general) se organizaron para reclamarle al Estado información sobre el paradero de las personas detenidas. Surgieron organismos de derechos humanos, entre los cuales cabe mencionar a Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, que comenzaron reclamando por la aparición con vida y luego por la verdad y el castigo a los responsables de los secuestros. Un profundo análisis al respecto lo propone el artículo de Luciano Alonso en este mismo dossier.

presidencia), fue la última iniciativa concreta del régimen militar por alcanzar acuerdos políticos con los civiles y controlar el futuro gobierno democrático.

Para puntualizar esta transición *que no fue*, pero que sin dudas marcó el camino para la reinstitucionalización democrática³, contamos con una serie de *Informes de situación psicosocial* elaborados en 1981 por la Secretaría de Información Pública (SIP) dependiente del Poder Ejecutivo, a partir de encuestas y sondeos de opinión realizados por la Subsecretaría del Interior (dependiente del Ministerio del Interior), la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y los organismos de inteligencia del Ejército, con el objetivo de medir a la opinión pública. Se trata de un material que hallamos disperso en dos reservorios: el llamado *Archivo BANADE*⁴ y el Archivo Provincial de la Memoria de Santa Fe⁵. Estos documentos reservados, junto a sus análisis oficiales, proyecciones y resultados, tienen una riqueza inusitada por varias razones: no solo constituyen un material atractivo por haber sido poco indagados hasta el momento, sino fundamentalmente porque son una evidencia del interés del régimen por conocer la opinión de la población sobre las acciones de gobierno. Si bien la última dictadura contó con legitimidad de origen, también debió construir y renovar su propio consenso. La información obtenida en las encuestas y sondeos sirvió, en este sentido, para conocer la opinión pública sobre la actuación del régimen militar y luego proyectar políticas comunicacionales, culturales y de propaganda con el objetivo de ampliar los apoyos sociales⁶. Estas acciones fueron realizadas en el marco de la estrategia castrense de Acción Psicológica (AS de aquí en más)⁷ en la que fueron adoctrinadas las FFAA, y cuyo contenido consistió en un saber específico sobre modalidades de conducción gubernamental de la población, difusión propagandística de actos de gobierno y discursos oficiales, etc., en pos de captar la adhesión de la sociedad, movilizarla y neutralizar toda información crítica⁸.

44

3. Inés GONZÁLEZ BOMBAL, *El diálogo político: la transición que no fue*, Documentos CEDES, 61 (1991).

4. Se conoce como *archivo BANADE* a los documentos hallados en el año 2000 en el Ministerio del Interior, sitio en el que funcionó durante la dictadura el Banco Nacional de Desarrollo (BANADE). El material encontrado fue entregado a la CONADEP y hace unos años al Archivo Nacional de la Memoria. Ver Hernán INVERNIZZI y Judith GOCIOI, *Un golpe a los libros. Represión a la cultura durante la última dictadura militar*, Buenos Aires, EUDEBA, 2003, pp. 25-26.

5. El archivo resguarda los informes producidos y recibidos por la Dirección General de Informaciones (DGI) que funcionó entre 1966 y 1991, dependía del gobernador de Santa Fe y fue la agencia de enlace con la SIDE (Gabriela ÁGUILA, “Las tramas represivas: Continuidades y discontinuidades en un estudio de caso. La Dirección General de Informaciones de la Provincia de Santa Fe, 1966-1991”, *Sociohistórica*, 31 (2013)). Desde el 2009 el fondo es administrado por el Archivo Provincial de la Memoria de Santa Fe (APMSF). Al momento de realizar las consultas para este trabajo, el Archivo contaba con una política restringida de acceso a la documentación (sólo era viable acceder mediante un pedido de búsqueda a los empleados). Hoy la situación es distinta, y esperamos que el acceso directo al material nos permita seguir profundizando este trabajo.

6. Véase el artículo de Julia RISLER y Laura SCHENQUER en el que se cuestiona la hipótesis consagrada que subrayaba el desinterés de las autoridades de facto por lograr el apoyo de la población y se propone, por el contrario, que la última dictadura militar debió actuar para construir consenso (“Las encuestas y sondeos de opinión pública. Tecnologías gubernamentales para el ejercicio del poder de la última dictadura militar argentina, en un año de suma tensión (1981)”, *Sociohistórica*, n. 42 (2018)).

7. AS fue la abreviatura utilizada en los manuales, reglamentos y órdenes militares.

8. Julia RISLER escribió su tesis doctoral sobre la AS que aquí nos limitamos a citar: “Acción psicológica, comunicación y propaganda durante la última dictadura argentina (1976-1983)”, Universidad de Buenos Aires, 2015.

Nuestro estudio releva una etapa bisagra en la dictadura: la del Gobierno presidido por Viola entre marzo y diciembre de 1981, fase que en realidad había comenzado en octubre de 1980, cuando se dio a conocer que el régimen preparaba el primer recambio presidencial. En esta etapa, a diferencia de la anterior, la recuperación de cierto piso de apoyo social se volvió un tema imperioso para mantener el control e implicó la adopción de medidas de concesión y acercamiento a la sociedad que en nada se parecieron a la distancia y al intento refundacional de la etapa anterior basada en el supuesto de que ésta se encontraba enferma e infiltrada por la *subversión*. A su vez, este intento de planificar un camino de acuerdos cívico-militares con el fin de alcanzar una transición pactada reveló un escenario totalmente opuesto al que llevó a la efectiva vuelta a la democracia en 1983. Durante ese año, con el régimen militar derrumbado tras la guerra perdida por las Islas Malvinas, quedó en evidencia que el régimen militar carecía de toda posibilidad de negociar o exigir a los civiles, y controlar, a su vez, las acciones del futuro gobierno democrático. Este trabajo busca contribuir a problematizar la específica coyuntura de 1981, la cual fue sobre todo analizada a partir de la información pública y la prensa gráfica, siendo en menor medida abordada con fuentes oficiales del régimen militar. Pretendemos el reconocimiento de la estrategia de transición pactada, ideada con información de los sondeos de la opinión pública, y continuamente obstaculizada por actores civiles y militares que esperaban su fracaso.

Viola y la transición *frustrada*

Sin detenernos en una disquisición muy detallada sobre la noción de transición⁹, y eludiendo el debate acerca de si lo que sucedió en 1981 aceleró la salida democrática de diciembre de 1983, sostenemos que en medio de una crisis profunda¹⁰ iniciada en el quinto año del llamado *Proceso de Reorganización Militar* (PRN), sus autoridades



9. Existe una serie de debates sobre las transiciones: algunos discuten si resulta redundante o no utilizar la noción de *transición a la democracia* pues hay autores para los que el término *transición* supone siempre el proceso unívoco de descomposición de un régimen dictatorial hasta la consolidación del régimen democrático. A su vez, hay desacuerdos en torno al comienzo y al cierre de la transición: algunos señalan que alcanza con la subordinación militar al poder civil, mientras otros indican que sólo comienza cuando todos los actores políticos comprenden que no hay opciones fuera del sistema democrático). Asimismo, fue elaborado un lenguaje específico para diferenciar los tipos de transiciones y trazar análisis comparativos entre casos: pactada o acordada y no pactada (consecuencia del derrumbe o colapso del régimen dictatorial); manejada desde arriba (esto es por imposición) y desde abajo (por revolución); retardada, incompleta o prolongada; etc. (Guillermo O'DONNELL y Philippe C. SCHMITTER, *Transiciones desde un gobierno autoritario/4. Conclusiones tentativas sobre las democracias inciertas*, Buenos Aires, Paidós, 1991, pp. 247-258; Juan Carlos PORTANTIERO, "La Transición entre la confrontación y el acuerdo", en José NUN, y Juan C. PORTANTIERO (comps.), *Ensayos sobre la transición democrática en la Argentina*, Buenos Aires, Puntosur, 1987; Cecilia LESGART, "Usos de la transición a la democracia. Ensayo, ciencia y política en la década del ochenta", *Estudios Sociales*, 22-1 (2002); Waldo ANSALDI, "Juego de patriotas. Militares y políticos en el primer gobierno posdictadura en Bolivia, Brasil y Uruguay", en Alfredo PUCCIARELLI (coord.), *Los años de Alfonsín. ¿El poder de la democracia o la democracia del poder?*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2006; Claudia FELD y Marina FRANCO, "Democracia y Derechos Humanos en 1984, ¿hora cero?", en ídem e ídem, *Democracia, hora cero. Actores, políticas y debates en los inicios de la postdictadura*, Buenos Aires, FCE, 2015.

10. Una crisis que generó tensiones entre sectores que formaban el Gobierno. Éste había sido constituido a través de un acuerdo entre el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, quienes decidieron instaurar una estructura con distribución tripartita del poder. El órgano supremo fue la Junta Militar (integrada por los tres comandantes en jefes de las FFAA), de la cual dependió el presidente, la CAL (Comisión de Asesoramiento Legislativo), y el resto de los órganos de Gobierno. Durante el período de Viola, las tensiones entre la Junta y la Presidencia generaron obstáculos insuperables que analizaremos aquí.

comenzaron a prefigurar la transición pactada que deseaban y que en nada se iba a parecer a la que finalmente tuvo lugar. Según Portantiero, comenzó un proceso típico de transición en el que hubo una “primera fase de la descomposición del régimen autoritario” donde se observó mayor liberalización y “apertura” política¹¹. Es cierto que, tal como señala Hugo Quiroga, estos indicios de “liberalización” aún no indicaban la pérdida por parte del Gobierno del “control de la situación” ni mucho menos la “capacidad de intervención sobre la sociedad”¹². Más bien, dicha liberalización puede ser pensada en términos de una “concesión” otorgada por el régimen con el fin de recuperar capacidad de conducción y fortalecer su autoridad. La estrategia que debía allanar el camino hacia una transición controlada, “pactada”¹³ o condicionada por las FFAA terminó convertida en una transición “frustrada”¹⁴ o “abortada”¹⁵, por las dificultades para manejar el equilibrio entre las demandas sociales y los intereses de sectores opositores en el frente interno militar, los cuales desde el comienzo obstaculizaron las medidas adoptadas por Viola y presionaron para que renunciara.

Ya sea que el año 1981 representó el inicio del proceso de transición y descomposición del régimen, o bien fue el comienzo de la apertura política (aunque sin pérdida de control sobre la población), vale la pena puntualizar los cambios que efectivamente tuvieron lugar tras la asunción de Viola como presidente. Por un lado, comenzó un proceso de desmilitarización del Estado: el gabinete fue conformado por siete ministros civiles sobre un total de trece y por primera vez hubo gobernadores civiles¹⁶. En segundo lugar, la selección de los ministros respondió al interés por

11. “La Transición entre la confrontación y el acuerdo”, pp. 262-271. Además de PORTANTIERO, otros autores analizan la etapa de Viola como parte de la transición: Andrés FONTANA, “Fuerzas Armadas, partidos políticos y transición a la democracia en Argentina. 1981-1983”, *CEDES*, 28 (1984); GONZÁLEZ BOMBAL, “El diálogo político: la transición que no fue”; Andrés A. MASI RIUS, “El fracaso de la transición pactada. Argentina, 1976-1983”, *HAOL*, 15, 7-18 (2008); Guadalupe BALLESTER, “La transición a la democracia en Argentina a escala local: General Sarmiento 1981-1983, un caso del conurbano bonaerense”, *Claves. Revista de Historia*, n. 5 (2017); entre otros.

12. Diferente a lo sucedido tras la derrota en la Guerra de Malvinas en 1982, que aceleró el fin del régimen. Ver Hugo QUIROGA, *El tiempo del “Proceso”. Conflictos y coincidencias entre políticos y militares 1976-1983*, Rosario, Horno Sapiens Ediciones, 2004, pp. 261-270; Daniel MAZZEI, “Reflexiones sobre la transición democrática argentina”, *PolHis*, n. 7 (2011); y otros.

13. María de los Ángeles YANNUZZI, *Política y dictadura. Los partidos políticos y el “Proceso de Reorganización Nacional” 1976-1982*, Rosario, Editorial Fundación Ross, 1996, pp. 349-357.

14. Paula CANELO, *El proceso en su laberinto: la interna militar de Videla a Bignone*, Buenos Aires, Prometeo Libros Editorial, 2008, p. 164.

15. MAZZEI, “Reflexiones sobre la transición democrática argentina”.

16. Los siete ministros civiles fueron: Lorenzo Sigaut (en Hacienda y Finanzas), Jorge Aguado (en Agricultura), Eduardo Oxenford (en Industria y Minería), Carlos García Martínez (en Comercio e Intereses Marítimos), Oscar Camilión (en el Ministerio de Educación), Carlos Burundarena (en Cultura y Educación) y Amadeo R. Frúgoli (en Justicia) (Marcos NOVARO y Vicente PALERMO, *Historia Argentina. La dictadura militar 1976/1983. Del golpe de Estado a la restauración democrática*, Buenos Aires, Paidós, 2006, pp. 358-359). Los ejecutivos provinciales recién en 1981 comenzaron a ser ocupados por civiles aunque todavía eran una minoría respecto de los militares (Paula CANELO, “Construyendo elites dirigentes. Los gobernadores provinciales durante la última dictadura militar (Argentina, 1976-1983)”, *Anuario del Centro de Estudios Históricos “Prof. Carlos A. Segreti”*, (2013)). Diferente fue la situación de las intendencias municipales, que desde 1976 fueron manejadas por civiles en una importante mayoría (Daniel LVOVICH, “Burocratas, amigos, ideólogos y vecinalistas: el reclutamiento de funcionarios municipales de Morón durante la última dictadura militar (1976-1983)”, en Ernesto BOHOSLAVSKY y Germán SOPRANO (eds.), *Un Estado con rostro humano. Funcionarios e instituciones estatales en la Argentina (1880 a la actualidad)*, Buenos Aires, UNGS/Prometeo, 2010).

mostrar un acercamiento a los sectores propietarios rurales e industriales¹⁷. A estos últimos, sobre todo, fue a los que el Gobierno buscó convertir en interlocutores válidos permitiendo, por ejemplo, la reapertura de la entidad gremial Unión Industrial Argentina (UIA), que había sido disuelta en 1976 y que reunía a opositores de la política económica de apertura neoliberal encabezada por Martínez de Hoz¹⁸. Por otra parte, tanto algunas corrientes sindicales como ciertos partidos políticos celebraron las elecciones del brigadier Julio Porcile como ministro de Trabajo y del general Horacio T. Liendo como ministro del Interior, considerados “dos hombres de las Fuerzas Armadas que aparecen con una marcada vocación dialoguista”¹⁹. Esto fue acompañado por la promesa de iniciar rondas de diálogo en las que fuera posible debatir la Ley de Asociaciones Profesionales y el Estatuto de los Partidos Políticos que regularían las actividades de ambos sectores, formalmente suspendidas desde 1976²⁰. Claramente, todas estas modificaciones implicaban una apertura y un descongelamiento político que favorecieron el desarrollo de un clima social de “distensión política y cultural, de recuperación de algunos derechos individuales y colectivos”²¹ y que fue propicio para la formación de la Multipartidaria en julio de 1981, una estructura institucional formada por partidos políticos que, si bien no fue un frente antidictatorial que rompió o pretendió derrocar a la dictadura, se constituyó en una instancia de confluencia entre partidos que acordaban necesario comenzar a negociar con el régimen el tránsito a la democracia²².

Sin embargo, los cambios habilitados por el régimen –entre otros, el acercamiento a los grupos de interés económico, partidos políticos y sindicatos para recobrar capacidad de direccionamiento– pronto fueron calificados de gestos limitados sin pronunciamientos concretos sobre las modalidades o los plazos de entrega del poder a los civiles²³. Viola intentó construir un equilibrio muy delicado entre una sociedad que demandaba imprimir cambios al modelo económico en crisis y restablecer el juego político, y la presión ejercida por el sector *duro* de las FFAA que desconfiaba de Viola y de su propuesta aperturista, encabezado por el comandante en jefe del Ejército general Leopoldo F. Galtieri, quien como miembro fuerte de la Junta Militar condicionó continuamente sus decisiones²⁴.



17. FONTANA, “Fuerzas Armadas, partidos políticos y transición a la democracia en Argentina”.

18. Soffa VILLARREAL, “La Unión Industrial Argentina”, en NUN y PORTANTIERO, *Ensayos sobre la transición democrática en la Argentina*.

19. QUIROGA, *El tiempo del “Proceso”*, p. 227.

20. FONTANA, “Fuerzas Armadas, partidos políticos y transición a la democracia en Argentina”.

21. *Ibidem*, p. 269.

22. YANNUZZI, *Política y dictadura*, pp. 352 y 432.

23. De hecho, según la primera alocución de Viola como presidente parecía que ese horizonte no estaba en los planes del Gobierno, sino todo lo contrario: “No he sido designado por la Junta Militar para presidir la liquidación Proceso” (QUIROGA, *El tiempo del “Proceso”*, p. 225).

24. Seguimos a Paula CANELO, quien diferencia tres sectores dentro de las FFAA: los “duros”, fuertes en la Fuerza Aérea y el Ejército, estaban en contra de cualquier negociación con los civiles; los “moderados”, quienes aceptaban la convergencia civil-militar en estructuras como el MON (Movimiento de Opinión Nacional) ideado para *heredar* la dictadura tras la apertura democrática; y finalmente los “politicistas”, un sector dentro de los “moderados” que pretendía entablar una negociación con los partidos políticos tradicionales y no crear una nueva estructura como el MON. Mientras el presidente Videla era parte de los “moderados”, Viola fue miembro de los “politicistas” (*El proceso en su laberinto*, pp. 162-163).

En materia económica, el recambio presidencial también fue acompañado de modificaciones significativas. Tras el golpe de Estado de 1976, el equipo liderado por Martínez de Hoz había impulsado un modelo neoliberal basado en el intento refundacional del Estado (privatización de las empresas públicas y achicamiento del Estado), el disciplinamiento de los sectores asalariados y la redistribución del ingreso nacional (reduciendo gastos en salud y educación), así como la modificación de la estructura productiva con el aumento del peso del sector financiero²⁵. En 1980, antes de asumir Viola, esta política económica había entrado en crisis. La convergencia de las altas tasas de interés con el retraso cambiario desprotegeron a la industria²⁶. A estas dificultades se le añadieron signos cada vez más concretos de emergencia en el mundo financiero: el cierre del Banco de Intercambio Regional (BIR) y la liquidación de más de 35 entidades financieras, llevó al Banco Central a determinar la intervención en otras tres entidades bancarias relevantes²⁷. Con la inflación aumentó la emisión monetaria, y la disminución en la reserva de divisas extranjeras, junto a la solicitud de nuevos préstamos, no solo siguieron incrementando la ya gigantesca deuda externa, sino que elevaron el peso de dos sectores: los exportadores agropecuarios con divisas en su haber y los acreedores externos que presionaban a través de los miembros del *establishment* local y de las políticas del FMI²⁸.

Con la asunción de Viola en 1981, las expectativas sociales giraron en torno a su reconocimiento como cabeza de un gobierno de transición que sería capaz de colocar paños fríos y resolver la situación de endeudamiento, la reducida inversión privada y el pronunciado proceso de desindustrialización²⁹. El nuevo presidente prometió en sus primeros discursos imprimir un nuevo rumbo para responder a esas expectativas. Fomentó cambios políticos evidentes –relativos al reconocimiento de los partidos políticos, incluyendo al peronismo bajo ciertos condicionamientos–, al mismo tiempo que dio señales de tomar distancia del *establishment* financiero beneficiado por el modelo del ministro Martínez de Hoz³⁰. Sin contar con el apoyo unánime de toda la corporación militar, ¿por qué Viola optó por introducir estos cambios? Más allá de su reconocido carácter como un militar *politicista* y dispuesto al diálogo con los civiles, ¿contaba con algún instrumento que lo dotara de un conocimiento de lo que la sociedad demandaba y cuya concesión le daría margen en la crisis que intentaba conducir?

48

25. Daniel AZPIAZU, Eduardo BASUALDO y Miguel KHAVISSE, *El nuevo poder económico en la Argentina de los años 80*, Buenos Aires, Editorial Legasa, 2004, p. 186.

26. Los patrones de industrialización sustitutiva fueron alterados, pero se consolidó una fracción de los sectores dominantes que aumentó su control sobre los mercados y condicionó el accionar del Estado (*Ibidem.*, pp. 187-189).

27. Eduardo BASUALDO, *Estudios de historia económica. Desde mediados del siglo XX a la actualidad*, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2006, p. 139.

28. Jorge SCHVARZER, *Martínez de Hoz: la lógica de la política económica*, Buenos Aires, CISEA, 1983, pp. 97-102.

29. QUIROGA, *El tiempo del "Proceso"*, p. 231.

30. Martínez de Hoz, a pesar de no dirigir más la cartera, mantuvo una velada presencia en la etapa de Viola, orientada no sólo a sostener su modelo económico sino fundamentalmente a proteger los intereses de los grupos económicos que lo habían apoyado y se mostraban temerosos de ser desplazados por la nueva conducción (QUIROGA, *El tiempo del "Proceso"*). Nos referimos a los grandes productores, empresas comercializadoras y transformadoras de los productos agrarios (como Bunge y Born, Molinos, Techint, Pérez Companc, y otras), y los grandes Bancos (Galicia, Río, Francés, etc) (Enrique VÁZQUEZ, *La última. Origen, apogeo y caída de la dictadura militar*, Buenos Aires, Eudeba, 1985, pp. 119-120).

La construcción de un saber sobre la opinión pública

El diseño e implementación de sondeos y encuestas de opinión fueron las principales herramientas que utilizó el régimen militar para medir el ánimo de la opinión pública, establecer estrategias para lograr el apoyo y la adhesión al gobierno, y construir o renovar el consenso de la población. Estas técnicas de conocimiento de la opinión pública fueron desplegadas al mismo tiempo que se realizaban campañas de propaganda y de control de la información a lo largo de todo el territorio nacional³¹. Julia Risler aportó al reconocimiento de estas herramientas de manejo de la opinión de la población al estudiar pormenorizadamente la Acción Psicológica (AS), una estrategia castrense que utilizó los medios de comunicación social (orales, escritos, gráficos y artísticos) para conducir y/o imponer comportamientos, modelar actitudes y valores en una población determinada, y cuya principal técnica fue la propaganda³².

Cabe destacar que la AS empleada por los militares argentinos fue elaborada bajo el influjo de las doctrinas de guerra revolucionaria y de seguridad nacional en las que fueron formados los Ejércitos latinoamericanos en el marco de la Guerra Fría³³. También encontramos en su elaboración y desarrollo la contribución de teorías provenientes, por un lado, del campo de la comunicación y la propaganda, las cuales analizan los efectos que tienen los medios masivos sobre la población, y utilizan métodos de persuasión y repetición con los que logran afectar la autonomía de los individuos para obtener respuestas esperadas. Y por el otro, destacamos la presencia de fundamentos de la psicología conductista, la cual indica que bajo ciertos estímulos es posible obtener respuestas condicionadas tanto en lo relativo a conductas individuales como colectivas³⁴.

A pesar de que existen evidencias que prueban que esta estrategia de AS era parte del capital manejado y aplicado por las FFAA antes de 1976, fue durante la última dictadura que adquirió el estatuto de estrategia psicosocial, para cuya implementación fueron afectadas agencias estatales específicas. Nos referimos a las agencias encargadas del *ciclo de información pública*, creadas en períodos anteriores, como la Secretaría de Información Pública (SIP), la Subsecretaría del Interior dentro del Ministerio del Interior, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y los organismos de inteligencia



31. Véase la crítica a aquellos trabajos que consideran que los sondeos y encuestas comenzaron a ser sistemáticamente utilizados a partir de la reapertura democrática (RISLER y SCHENQUER, “Las encuestas y sondeos de opinión pública”).

32. “Acción psicológica, comunicación y propaganda...”.

33. La AS también fue implementada en otros países vinculados a través del Plan Cóndor. Tenemos constancia de que en Chile se ejecutó un programa de “preparación psicológica de la población para contrarrestar la acción marxista”, el cual comenzó a funcionar en noviembre de 1973 y fue elaborado por el psicólogo Hernán Tuane Escaff, quien tuvo a su cargo la asesoría civil del Departamento de Relaciones Humanas y Conducta Social de la Secretaría General de Gobierno. En 1974 el dictador Augusto Pinochet ordenó la confección de un “Plan de Acción Psicológica” (sic) para manipular “el impulso agresivo” de los habitantes, con el fin de “continuar con la acción de minimizar y destruir la imagen del marxismo, demostrando que es intrínsecamente malo”. A cargo de este proyecto estuvo Tuane Escaff quien elaboró el documento llamado “Campaña de penetración psicológica masiva” que habría tenido por objeto “manipular la mente de la población para mantener el miedo” (Carlos DORAT GUERRA y Mauricio WEIBEL BARAHONA, *Asociación Ilícita. Los Archivos Secretos De La Dictadura*, Santiago de Chile, Ceibo Ediciones, 2012; David PAVÓN-CUÉLLAR, “Psicología y Destrucción del Psiquismo: La Utilización Profesional del Conocimiento Psicológico para la Tortura de Presos Políticos”, *Psicologia: Ciência e Profissão*, n. 37 (2017), pp. 11-27).

34. RISLER, “Acción psicológica, comunicación y propaganda...”, pp. 43-48.

del Ejército. Sobre todo la SIP y la Subsecretaría del Interior se ocuparon de recopilar la información producida por las otras agencias sobre el ánimo y los juicios de la población ante las acciones de gobierno. Para ello, pusieron en práctica el *análisis de medios de comunicación* que consistía en revisar diariamente la información publicada por los principales medios de prensa y luego, elaborar informes evaluativos sobre los mismos. Esta información era complementada con las encuestas y sondeos de opinión, a las que nos venimos refiriendo, y que ideaban tanto la SIP como la SIDE. La información obtenida también era analizada y constituía la base para el trazado de recomendaciones al Poder Ejecutivo Nacional sobre la conveniencia o no de comunicar determinados actos de gobierno y sobre todo de enfatizar las fortalezas o aquellos aspectos medidos con buen impacto social³⁵.

Los encargados de evidenciar la importancia de estas agencias y del manejo del llamado *ciclo de información pública* para incrementar los apoyos sociales al régimen fueron los miembros de la Secretaría General de la Presidencia integrada por el General José R. Villarreal y el asesor Ricardo Yofré, quienes en un documento del año 1977 destacaron:

Todo gobierno –de iure o de facto– se LEGITIMA, o pierde LEGITIMACIÓN, en la medida del consenso que obtiene en el desarrollo de su programa de acción [...] Cualquiera sea, pues, el tipo de régimen adoptado, un gobierno no puede desentenderse de lo que ocurre en el plano de la opinión pública³⁶.

Justamente, la mayor apuesta durante el gobierno de Viola fue reconstruir en la opinión pública esa confianza que había existido en los primeros años del régimen sobre las FFAA como *conductoras*. Para ello, desde el comienzo de esta etapa fueron anunciados cambios de liberalización política y de nueva política económica, de gran impacto discursivo pero pocas veces concretados, y que fueron asumidos a partir de los resultados de las encuestas y sondeos de opinión. En el próximo apartado nos concentramos en dos estrategias nodales emprendidas por el Gobierno de Viola para la renovación del consenso. Por un lado, el interés por mostrar que esta gestión llevaría adelante un *cambio*, que primero se focalizó en la modificación del rumbo económico y luego en el laborioso cuidado de una *imagen* presidencial, materializada a través de sugerencias brindadas a Viola para la adopción de actitudes y gestos sondeados positivamente entre la población, para posicionarlo como una “figura más cercana a la ciudadanía”, lo que contrastaba con el estilo de comunicación “distante y fuertemente institucional” que caracterizó a la imagen del gobierno de Videla³⁷. Y, por el otro, el fin de la hegemonía militar y el aumento de la participación de civiles en el gobierno militar para evidenciar la intención gubernamental de apertura política y que fue plasmada dando impulso al *diálogo cívico-militar* con el que esperó recuperar la atención de la opinión pública.

35. *Ibidem.*, pp. 40-44

36. “Plan de Acción Política de la Propuesta de Unión Nacional”, Secretaría General de la Presidencia, 11/77. Documentos de CIPOL (Centro de Investigación Política) <<http://www.cipol.org/colecciones.php>> (consulta 26-06-2018), mayúsculas en el original. Un análisis profundo de este plan y de otros similares elaborados por diferentes sectores del régimen sobre las condiciones de 1977-1978 y la proyección a futuro del régimen puede encontrarse en Paula CANELO, “La importancia del nivel municipal para la última dictadura militar argentina. Un estudio a través de sus documentos reservados y secretos (1976-1983)”, *Historia*, 48-2 (2015).

37. GONZÁLEZ BOMBAL, “El diálogo político: la transición que no fue”.

La estrategia moderada de Viola

De acuerdo a los estudios sobre el gobierno de Viola, el proyecto *moderado* de apertura política y de cambios a nivel económico estuvo *condicionado* por diferentes sectores que mantuvieron una presión continua a lo largo de todo el período: 1- los sectores duros de las FFAA, que rechazaban su propuesta de acercamiento a los partidos políticos y pretendían la continuidad del PRN a la vez que formar el MON (Movimiento de Opinión Nacional) que oficiaría de partido de centro-derecha para *heredar* el Proceso; 2- los anteriores beneficiados por el modelo económico de Martínez de Hoz, que temían ver sus intereses perjudicados por el nuevo equipo económico; 3- la Junta Militar –integrada por el general Galtieri, el almirante Lambruschini y el brigadier Graffigna–, la cual ejerció un rol tutelar sobre el presidente y en marzo de 1981 le marcó pautas de acción a través del documento “Orientaciones N° 2 de las Bases instrumentales para la acción de gobierno”³⁸; y 4- los partidos políticos opositores al PRN que, sin tener una actitud confrontativa, demandaban que Viola estableciera los plazos para la vuelta a la democracia. Los diferentes trabajos que hemos mencionado han relevado estas tensiones, pero no siempre permitiendo dilucidar las características e intenciones perseguidas por Viola a través de su proyecto *moderado*, elaborado junto a su equipo de aliados y asesores. Con marcados vaivenes y decisiones –incluso contradictorias–, podemos mostrar que el contenido de este proyecto fue sensible a los datos sobre opinión pública relevados por las agencias de gobierno que determinaron un accionar político concreto.

Viola asumió la presidencia el 29 de marzo de 1981. Según las mediciones de la SIP³⁹ comenzaba su mandato con una opinión pública en la que se observaba un “efecto psicosocial favorable” debido a las expectativas de cambio y de mayores libertades políticas que se suponía el nuevo Gobierno inauguraría, y que fueron anunciadas en el primer discurso presidencial⁴⁰. A su vez, las mediciones mostraban que la propia figura presidencial generaba opiniones positivas: la SIP destacó que Viola “produjo un impacto favorable, dado lo novedoso de la actitud” al brindar una conferencia de prensa y dialogar con el periodismo en la Casa de Gobierno, un cambio relevante en relación a la actitud más reticente que la gestión de Videla había mantenido con la prensa.

El nuevo presidente de facto destacaba en sus discursos la idea de que estaba en marcha un *cambio*. Un ejemplo en este sentido lo constituyó el pronunciamiento que tuvo lugar cuando participó de la clausura de la reunión de gobernadores en Santa Fe, el 19 de junio de 1981:

Se dice, a veces con inocultable propósito desestabilizante, que el Proceso está en crisis. Y digo que pueden tener razón, pero la crisis que vivimos es *la crisis del cambio*,

38. CANELO, “La importancia del nivel municipal para la última dictadura militar argentina”.

39. En la mayor parte de los informes de la SIP no se especifican los modos de construcción de las muestras para la realización de sondeos y encuestas de opinión. A pesar de esta información faltante, que es determinante para reconocer la veracidad de los estudios, consideramos que estos documentos nos permiten focalizarnos en el nivel de los procesos de toma de decisiones por parte del Ejecutivo, resoluciones que estuvieron en relación con el análisis de los datos recabados sobre la población.

40. Los anuncios de Viola, que según la SIP fueron los de mejor recepción en la opinión pública, fueron: las promesas de disminución del gasto público, la supresión de organismos en la administración pública y la privatización de empresas del Estado; la atención a los cuestionamientos en torno a la situación de los derechos humanos; la solución a la situación del movimiento justicialista; la promesa de mejora de las relaciones internacionales, una predisposición al diálogo frente a las inquietudes en materia laboral; entre otros (BANADE-CONADEP, SIP, “Situación Psicosocial”, 29-3 a 14-4-1981).



consecuencia de la adecuación de nuestras acciones a las necesidades de esta etapa, prevista desde el comienzo del mismo Proceso⁴¹.

Lo interesante de este planteo es la estrategia de sustitución con la cual Viola pretendía reemplazar la “crisis” por el “cambio”. La crisis, que en 1981 evidenciaba una situación de descontrol, de ingobernabilidad, de imposibilidad de manejar los desequilibrios económicos, etc., era presentada en términos de un cambio o proceso planificado de transformación, una transición dirigida que incluía una fase crítica no deseada, la cual precisaba de sacrificio colectivos para alcanzar resultados superadores. El “cambio” representaba también una apuesta comunicacional vinculada a la previsibilidad de un Gobierno que pretendía ofrecer certezas y tranquilidad para disminuir el temor y la incertidumbre social.

Durante los primeros meses de gestión, la idea de *cambio* fue utilizada para hacer referencia a una serie de reformas político-económicas impulsadas por el nuevo equipo económico dirigido por el ministro Lorenzo Sigaut, quien esbozó un camino contrario al de su antecesor: abandonó la *tablita* cambiaria⁴², devaluó la moneda, refinanció los pasivos de las empresas y emitió un Bono de Consolidación para financiar al sector productivo endeudado en dólares⁴³. La SIP llevó adelante un análisis del impacto en los principales medios de comunicación de las medidas anunciadas, y encontró que habían tenido una “amplia repercusión” sobre todo en los sectores industriales más críticos a la anterior gestión que se habían mostrado con una actitud de “prudencia” así como también “expectantes y si se quiere esperanzados [...] por la complementación del paquete de las medidas anunciadas”⁴⁴.

52

Las declaraciones de Lorenzo Sigaut realizadas desde España dejaron traslucir el reconocimiento favorable y de confianza que estas mediciones generaron en el equipo más cercano a Viola. En abril, el ministro salió de gira en busca de respaldo internacional (seriamente dificultado por las críticas vertidas por el anterior ministro Martínez de Hoz), defendió su programa diciendo que no era neoliberal como el anterior, tampoco keynesiano, y que de seguir con el anterior modelo la crisis argentina iba a ser más profunda:

Nuestro enfermo, el país, no tiene que ir al quirófano. Nuestro enfermo tiene una profunda actitud *a favor del cambio*. Lo que sí, *hemos tenido que cambiar* el recetario, eso no lo dude. El anterior, de alguna manera, iba a complicar el grado de la enfermedad⁴⁵.

Pero estas expectativas pronto se disiparon. A cinco semanas de la asunción de Viola, en los primeros días de mayo, la prensa evidenciaba ataques al gobierno provenientes sobre todo de los grupos económicos desplazados. Según la SIP, “encuestas oficiales realizadas en todo el país, han puesto de manifiesto gran

41. VÁZQUEZ, *La última*, p. 254 (cursiva agregada).

42. La *tablita* cambiaria fue impuesta durante la gestión de Martínez de Hoz y consistió en una tabla de cotizaciones diarias del dólar, la cual informaba a los operadores del mercado del valor de la divisa facilitando la compra/venta especulativa de dicha moneda.

43. NOVARO y PALERMO, *Historia Argentina. La dictadura militar 1976/1983*, p. 367.

44. BANADE-CONADEP, SIP, “Situación Psicosocial”, 29-3 al 14-4-1981.

45. “Mi mejor plan es la prudencia”, *Gente*, n. 820, 8-4-1981, cursiva agregada.

preocupación e inquietud por una serie de problemas no resueltos”⁴⁶. Lo explícitamente señalado era que las medidas económicas adoptadas por la nueva administración eran insuficientes para salir inmediatamente de la crisis, pero a la vez las críticas y dudas referían a que veían al gobierno “inmóvil” con “dudas e indefiniciones en cuanto a políticas a aplicar en sus áreas” producto de las tensiones entre la Junta Militar y el Poder Ejecutivo. En mayo, *La Nación* y otros medios nacionales habían publicado un “listado de asesores” presidenciales de los que se destacaba que varios eran impuestos por las FFAA, evidenciando la capacidad fiscalizadora de la Junta Militar sobre Viola. Según la SIP, la noticia impactó negativamente por diferentes razones: “en el plano de las implicancias ideológicas”, exhibía lo condicionado que se encontraba Viola y, a su vez, los asesores transgredían los límites de su función, ya que no se limitaban a aconsejar al presidente cuando éste lo requería, sino que efectuaban declaraciones en los medios que muchas veces entraban “en sensibles contradicciones de contenido” con las declaraciones de Viola. Tal era el caso del ex ministro del Interior y por entonces asesor, general Albano Harguindeguy, quien en vez de apoyar el diálogo con los partidos, al que nos referiremos en breve, continuaba en 1981 defendiendo la creación de la organización MON para agrupar a la centro derecha en todo el país. En el informe de la SIP se mencionaban sus contactos con “varios grupos” creando “un diálogo paralelo al que llevaría a cabo el Gral. Liendo”, ministro del Interior y responsable del contacto con los partidos políticos⁴⁷.

Mientras que esta ola de rumores desestabilizaba al régimen, en forma llamativa y casi como si fueran vocero suyo la revista *Gente* publicaba una nota aclaratoria bajo el título “Los hombres que asesoran a Viola”, en la que se detallaba la importancia de cada uno de los asesores, las diferentes áreas que abarcaban, los sueldos que percibían y se relativizaba su número: “A lo mejor sea cierto que todos los presidentes han tenido 19 asesores –29 o 59–, pero jamás se le dio tanta publicidad a su nombramiento [...]. ¿Qué hacer ahora? Bueno, ahora sólo cabe una salida: explicar”⁴⁸.

Más allá de este operativo de prensa, la SIP definió una nueva estrategia para el Gobierno que había hecho del “cambio” su emblema. Tras reconocer que las modificaciones en materia económica serían lentas y que quizás nunca se iban a recuperar las adhesiones del comienzo de la gestión, la agencia se concentró en potenciar y multiplicar los juicios favorables y reducir las opiniones negativas al régimen, esta vez impulsando las cualidades de Viola. Siguiendo las primeras mediciones, ya destacadas, la idea era elevar las apariciones en los medios que lo

46. Los temas referidos iban desde la falta de viviendas en diferentes provincias, el cierre de fuentes de trabajo, los salarios insuficientes, hasta el reconocimiento de que la inflación mensual era de “dos dígitos” (12,2%) y el aumento del costo de vida registrado por el INDEC del 7,9% (que según la SIP toda la prensa calificaba de “poco realista”). Incluso la UIA, afín a la conducción de Viola al comienzo de su Gobierno, en mayo señaló que “preocupa a los industriales agrupados en la UIA la reactivación productiva, ya que no vislumbran claramente a la política que encarará el Gobierno para estimular la actividad del sector” (BANADE-CONADEP, SIP, “Situación Psicosocial”, pág. 9, 6 a 12-5-1981).

47. *Ibidem*. El propio Harguindeguy no ocultaba que mantenía reuniones con diferentes grupos de poder a los que intentaba convencer sobre la importancia de continuar lo tratado en las rondas de “diálogo” de 1980. Se refería al MON como la única estructura capaz de defender los “logros” del PRN en una futura apertura democrática y, a su vez, señalaba que se debía continuar impulsando la creación de un “Supremo Tribunal Electoral” formado por “las Fuerzas Armadas en nombre del PRN” y que en democracia “determine la idoneidad o no de los candidatos” políticos que se presentan a ocupar funciones públicas (“General Harguindeguy, ¿el Proceso perdió el rumbo?”, *Gente*, n. 845, 1-10-1981).

48. “Los hombres que asesoran a Viola”, *Gente*, 14-5-1981.



mostrasen como un militar “dialoguista”, “negociador”, y para contrastar la imagen de falta de poder por las tensiones con la Junta Militar, se agregaba potenciar “el poder de decisión presidencial”, “la ejecutividad de la gestión” y “la claridad en las definiciones de los objetivos de su gestión”⁴⁹.

En mayo, mientras disminuían las expectativas de que el Gobierno resolviera la crisis, la figura de Viola parecía ser diferenciada con cierto aval⁵⁰; del mismo modo en agosto⁵¹, cuando la imposibilidad del manejo de la crisis económica generó amplios pedidos de renuncia del ministro Sigaut y de su equipo, seguido en septiembre de 1981 por los rumores acerca de su posible reemplazo por una figura que podía recuperar y volver a dar continuidad al modelo de Martínez de Hoz, tal como lo era el ex ministro liberal Álvaro Alsogaray⁵².

Dos ejemplos de la estrategia de la SIP para potenciar la imagen presidencial los encontramos en el mes de agosto: ante el reconocimiento de los altos índices de desempleo como el problema más acuciante⁵³, la SIP aconsejó mostrar que para el presidente éste era un tema de primerísimo orden, y para ello debía aparecer impartiendo “instrucciones precisas al equipo económico acerca del tema salarial”, pues la agencia consideraba que este tipo de imágenes contribuía a la generación de “efectos psicosociales favorables” en la población⁵⁴. El segundo ejemplo es la utilización que realiza el régimen del impacto social provocado por un choque ferroviario. Si bien desde el comienzo mismo de la gestión de Viola habían sido declarados como objetivos prioritarios la disminución del gasto público y la reducción del número de empleados estatales, la concreción de estas medidas fue demorada. Viola no había sido capaz de tomar una decisión que inevitablemente agravaría los altos índices de desempleo en el país. El choque en marzo de 1981 de un tren de pasajeros de la empresa Ferrocarriles

54

49. BANADE-CONADEP, SIP, “Sondeo Mensual sobre aspectos de la realidad nacional”, paq. 15, 15-8 a 14-9-1981.

50. En mayo, el 52,7% de los encuestados “estima[ba] prematuro dar un juicio sobre la gestión presidencial”, lo que la SIP reconocía como un “aval temporario”. En este informe no se incluye la cantidad de encuestados del que se extraía ese porcentaje (BANADE-CONADEP, SIP, “Situación Psicosocial”, paq. 9, 6 a 12-5-1981).

51. En agosto se registra una franja estimable de apoyo social a Viola. De acuerdo a un sondeo realizado ese mes por la SIP a 500 entrevistados, el 59,8% seguía manifestando que Viola había inaugurado una “conducción distinta a la desarrollada por la gestión anterior” y ante la pregunta “¿Ud. apoya la gestión del presidente?” aún un 43,8% había respondido que sí. Ese apoyo se reforzaba por el contraste a la pregunta “¿Cómo piensa Ud. que van las cosas en el país?”: el 52,8% eligió la respuesta “Bastante mal” más el 33,8% que indicó “Muy mal” (BANADE-CONADEP, SIP, “Situación Psicosocial”, paq. 9, 12 a 18- 8-1981).

52. En la prensa se conocieron trascendidos sobre reuniones entre Viola y Alsogaray, a quien el presidente le habría solicitado consejos para cambiar los lineamientos económicos trazados por Sigaut. Quedaba así evidenciado el fracaso de Sigaut y “la imposibilidad de desarmar el modelo de Martínez de Hoz” (QUIROGA, *El tiempo del “Proceso”*, p. 236).

53. Hasta sectores del propio Gobierno reconocían la situación crítica. El ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires públicamente se refirió a “su inquietud por la situación por la que atraviesa el cinturón industrial del Gran Buenos Aires, [...] estimando que cerca de 200.000 personas están ociosas” (BANADE-CONADEP, SIP, “Situación Psicosocial”, paq. 9, 12 a 18- 8-1981).

54. BANADE-CONADEP, SIP, “Situación Psicosocial”, paq. 9, 6 a 12- 5-1981.

Argentinos⁵⁵, fue utilizado para alarmar a la población sobre la situación precaria de este medio de transporte en manos de la administración pública. En mayo, los medios pro oficiales *Somos y La Prensa*, publicaron un listado de 253 empresas públicas que generaban pérdidas millonarias al país⁵⁶, y más tarde la revista *Gente* mostró los resultados de una encuesta propia en la cual de 1.042 personas, 940 opinaban que los trenes debían ser privatizados⁵⁷. En ese marco específico, la SIP recomendó al ejecutivo aprovechar este clima social favorable para evidenciar el poder decisonal del presidente y tomar la “decisión política [...] de iniciar la privatización de esas empresas”, presentada bajo el argumento de mejorar el servicio de transporte y reducir el impacto del anuncio de privatización que solía inquietar a amplios sectores por sus implicancias en la estabilidad laboral⁵⁸. Ambos casos muestran las recomendaciones que la SIP, atenta al ánimo social, ofreció para facilitar el ejercicio del poder presidencial y convertir las decisiones presidenciales en respuestas concretas a las “necesidades” y “reclamos” sondeados entre la población.

El factor más determinante de la estrategia *moderada* de Viola fue la decisión de iniciar un proceso de liberalización política que contempló el diálogo con los partidos políticos y los sindicatos, encabezado por los ministros del Interior Liendo y de Trabajo Porcile. La convocatoria a los partidos, que tuvo características muy distintas al diálogo impulsado en 1980 por Videla⁵⁹, fue abandonada a fines de 1981, cuando asumió en reemplazo de Viola el general Leopoldo Fortunato Galtieri. Pero en marzo de ese mismo año constituyó la principal herramienta con la que la nueva gestión mostró su intención de avanzar hacia un proceso de mayor apertura política, reconociendo a los partidos como “los instrumentos válidos para canalizar las inquietudes ciudadanas”⁶⁰.

Viola, de esta manera, estaba siendo consecuente con los resultados de la *Encuesta Nacional sobre Diálogo Político* realizada en 1980, a lo largo de 17 provincias argentinas y con un total de 8.643 personas encuestadas. Los funcionarios de la SIP redactaron un informe de poco menos de 30 páginas, en el cual destacaron que el 73,4% de los encuestados estaba de acuerdo con el “diálogo” cívico-militar⁶¹ pero un



55. El choque se produjo cuando el tren de Ferrocarriles Argentinos impactó con un tren de carga que se había detenido y descarrilado horas antes en la localidad de Brandsen (Buenos Aires). El siniestro provocó la muerte de 34 personas y más de 70 heridos.

56. BANADE-CONADEP, SIP, “Situación Psicosocial”, paq. 9, 6 a 12-5-1981.

57. Estos fueron los resultados de una encuesta realizada por la revista, cuyas preguntas habían sido publicadas semanas antes y los lectores debían responder enviando una carta a la redacción (“Gran plebiscito de gente”, *Gente*, 29-10-1981).

58. BANADE-CONADEP, SIP, “Situación Psicosocial”, paq. 9, 6 a 12-5-1981.

59. El diálogo convocado por Videla-Harguindeguy no reconocía a los civiles como representantes partidarios, sino se los convocaba a título personal y en proporción similar a otras personalidades tales como directores de diarios, de cámaras comerciales y académicos. La intención de este diálogo era concretar la “herencia del Proceso” a través de la convergencia de los invitados en una única estructura formada por civiles y militares. Las entrevistas con los civiles que participaron evidencian que esos encuentros oficiales no traducían ningún tipo de intención de alcanzar acuerdos cívico-militares, sino que habían sido creados para comunicar las medidas adoptadas por el régimen (ver QUIROGA, *El tiempo del “Proceso”*, pp. 85-90 y 248-253, y YANNUZZI, *Política y dictadura*, pp. 339-349).

60. QUIROGA, *El tiempo del “Proceso”*, p. 226.

61. El 73,4% que estaba de acuerdo con el diálogo político estaba formada por un escaso 6,7% que estaba “muy de acuerdo” y un mayoritario 66,7% que estaba “de acuerdo” (BANADE-CONADEP, SIP, paq. 54, “Encuesta nacional sobre diálogo político. 1980”).

53,2% no tenía del todo claro los motivos específicos por los cuales el Gobierno lo convocaba⁶² y el 66,9% indicaba que los civiles que el Gobierno había convocado no representaban sus intereses⁶³. La encuesta evidenciaba los problemas que su implementación había tenido, no solo la falta de reconocimiento del objetivo por el cual se impulsaba, sino fundamentalmente la falta de legitimidad ante la población de los civiles invitados como interlocutores.

A partir de estos resultados, Viola optó por convocar a los partidos políticos y que fueran estas estructuras las que definiesen los candidatos a participar de las rondas de negociación que inauguró en 1981 bajo la conducción del ministro del Interior Liendo. Viola esperaba que el diálogo cívico-militar entusiasmara a los dirigentes políticos –claramente, era una propuesta más alentadora que la de fusionarse en una estructura común cívico-militar (el MON) como insistía la Junta Militar y que fuera uno de los puntos destacados en el documento “Orientaciones n° 2”-. Viola buscaba que su propuesta de diálogo fuera entendida como un canal controlado pero finalmente de negociación, por medio del cual el régimen estaba dispuesto a acordar la legalización de la actividad partidaria (a través de la aprobación del Estatuto de los Partidos Políticos) para que estas estructuras recuperasen gradualmente el lugar de intermediarios y representantes de la sociedad. Es posible que en 1981, tal como lo registró la SIP, la clase política, sobre todo la de los partidos mayoritarios con anterioridad a 1976 (la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista), hubiera carecido de relevancia y ascendencia sobre buena parte de la población⁶⁴, y que esa situación posiblemente se mantuviera hasta fines de 1982, cuando en el marco del primer llamado a elecciones a realizarse en 1983 se realizara una fuerte campaña para el reconocimiento de los candidatos y para impulsar un proceso de afiliación partidaria masivo⁶⁵.

El Gobierno no sólo inauguraba en 1981 el diálogo para “normalizar” a los partidos, lo que implicaba una afrenta a la propuesta de la Junta Militar, sino que Viola destacó su invitación al partido justicialista considerado por los sectores “duros” de las FFAA el responsable del “caos populista” previo a 1976 y el que le había abierto las puertas del país a la “infiltración subversiva”⁶⁶. Sobre este partido, Viola señaló que, de aceptar “estructurarse” para adaptarse al proceso en marcha de diálogo cívico-militar no

56

62. La cifra de 53,2% se componía de los que habían respondido que la finalidad del diálogo político era: el 38,8% “establecer pautas para la próxima convocatoria electoral”, que según la SIP expresaba las expectativas de la gente pero no una promesa concreta declarada por el Poder Ejecutivo; el 12,2% “no sabe”, y el 2,2% “no responde” (BANADE-CONADEP, SIP, paq. 54, “Encuesta nacional sobre diálogo político. 1980”).

63. Bajo el título de “Representatividad de los convocados al diálogo” se destacó que el 14,4 señaló que estaba “en dudas”; 50,1% que “no” lo representaban; y 2,4% “no respondieron” (*Ibidem*).

64. De acuerdo con una encuesta realizada por la SIP a 500 personas en Capital Federal entre el 8 y 10 de abril de 1981, si bien casi el 60% consideraba que Viola inauguraba una etapa de mayores libertades políticas, solo poco más del 30% pensaba que los partidos políticos eran los instrumentos válidos para representar a la población (BANADE-CONADEP, SIP, “Situación Psicosocial”. 29-3 al 14-4-1981).

65. Tal como lo explica Marcelino MAINA, el Estatuto de los Partidos Políticos finalmente fue aprobado en agosto de 1982, bajo el gobierno del último dictador, el general Reynaldo Bignone, e incluyó que todo ciudadano que quisiera participar como elector debía estar afiliado a algún partido, lo que provocó una masiva afiliación ciudadana (“De lo nacional a lo local de lo singular a lo plural: La experiencia provincial santafesina y cordobesa en la transición a la incierta democracia argentina (1982-1983)”, en prensa).

66. GONZÁLEZ BOMBAL, “El diálogo político: la transición que no fue”.

confrontativo, podría participar del mismo⁶⁷. Tal como indicamos en un trabajo anterior, en 1981 con la posible baja ascendencia que la clase política tenía sobre la población, la *normalización* y la participación en el diálogo del justicialismo era más una estrategia gubernamental para ampliar las bases de apoyo que una demanda social concedida con el fin de comunicar que Viola cumplía con las demandas sociales⁶⁸.

A diferencia de los cálculos del régimen, para los partidos el diálogo podía convertirlos ante la sociedad en aliados del Gobierno. En julio, a pocos meses de comenzar las rondas de encuentro, las mismas estructuras partidarias invitadas formaron el frente cívico llamado MULTIPARTIDARIA. Sin duda, la iniciativa del frente de partidos era un cimbronazo para el régimen. No obstante, en el informe de la SIP, el autoconvocado frente partidario era evaluado como un actor con el que el Gobierno aún podía negociar las condiciones de una transición controlada, un sector con demandas disonantes más que de oposición. Por un lado, el diálogo propuesto por Viola careció desde el comienzo de todo interés social (en los informes de mayo y de agosto de 1981, la SIP indicaba que la razón fundamental era la propia interna militar entre la Junta Militar y el Poder Ejecutivo que quitaban credibilidad a las decisiones de Viola)⁶⁹, con lo cual el frente civil podía resultar una instancia de convergencia superadora. Por el otro, la Multipartidaria no demandaba grandes cambios a Viola con respecto a su programa de transición pactada. No proponían revisar la cuestión de las violaciones a los derechos humanos⁷⁰, y lo más importantes que reclamaban era concretar un cronograma preciso de elecciones, que no debía ser inmediatamente, sino a concretarse en 1984. Pero el Gobierno de Viola ya no tenía chances, para la Junta Militar había que recuperar la iniciativa del régimen, por lo que el pedido de licencia por enfermedad de Viola fue aprovechado para declararlo incapacitado a ocupar su cargo y para volver a la propuesta originaria del PRN que implicaba la asunción del poder de la línea *dura* y opuesta al diálogo cívico-militar y a la apertura democrática.



A modo de conclusión

Las encuestas y sondeos de opinión realizadas por el régimen militar tuvieron como objetivo medir el clima o ánimo social y elaborar propuestas comunicacionales o propagandísticas a fin de regular o modificar juicios, ánimos o valores de la opinión pública en situaciones coyunturales, o captar su adhesión y movilización en pos de los

67. Sobre la situación de conflicto específica con el partido justicialista véase YANNUZZI (*Política y dictadura*, pp. 272-284), quien analiza las diferencias entre sectores de las FFAA sobre el reconocimiento o no al peronismo por cuestiones tales como el juicio político que el régimen llevaba adelante a la líder y ex presidenta Isabel de Perón y la presión de los sindicatos de la CGT identificados con este partido

68. RISLER y SCHENQUER, “Las encuestas y sondeos de opinión pública”.

69. La instancia que el Gobierno había elegido para intentar construir su apoyo careció del respaldo del frente interno y nunca llegó a seducir a la población. Según la SIP, “no despierta expectativas en el hombre común, que ya vio agotado gran parte de su interés en la instancia anterior realizada el año pasado” (BANADE-CONADEP, SIP, “Situación Psicosocial”, pag. 8, 12 a 18- 8-1981

70. A raíz de ello fue que en 1981 las FFAA no buscaron ningún resguardo por lo actuado en la “lucha antisubversiva” porque entonces “no consideraban delitos los medios utilizados para alcanzar la victoria en esa guerra”. Si en 1981 no pensaban en salvaguardias u obstáculos jurídicos, sí lo hicieron en 1983, cuando dictaron la Ley de Pacificación Nacional, más conocida como Ley de Autoamnistía, para eludir la posibilidad de ser enjuiciados en democracia (GONZÁLEZ BOMBAL, “El diálogo político: la transición que no fue”).

objetivos planteados por el autoproclamado proceso de reorganización nacional. Estas técnicas –comúnmente utilizadas en los regímenes democráticos, y ahora sabemos que no exclusivamente– fueron desplegadas en el marco de la estrategia de Acción Psicológica a nivel nacional.

En nuestro artículo, nos focalizamos en el análisis de las estrategias comunicacionales implementadas durante el Gobierno *de facto* liderado por el general Viola, el cual se orientó principalmente a reconstruir el consenso entre la población para dotarse de una nueva legitimidad que facilitara la implementación de las políticas diseñadas por el régimen, en el marco de una crisis económica en ascenso y con un complicado frente interno delineado por las tensiones entre la Junta y la Presidencia, el cual ejerció una presión continua sobre el accionar del Gobierno. Todo esto se produjo en el marco del proceso de transición encarado por Viola, caracterizado por su propuesta aperturista, de invitación al diálogo político y de reconducción de la política económica, proceso que, como vimos, terminó finalmente frustrado y con Viola eyectado de la presidencia a solo 8 meses de haber asumido.

Las estrategias mencionadas las identificamos en los informes elaborados por el régimen militar sobre los sondeos y encuestas de opinión realizados durante 1981. Los informes de los funcionarios de la SIP, la Subsecretaría del Interior y la SIDE, encargados de analizar la información obtenida, revelaban que en 1981 el foco crítico que generaba una predisposición negativa de la población hacia al régimen era la situación económica, y la falta de confianza en que el Gobierno pudiera revertir la situación. Esto lo vinculamos con artículos publicados por la revista *Gente*, uno de los medios más colaboradores, que dan cuenta de la fuerte articulación diagramada por la estrategia psicosocial, donde los resultados sondeos en la opinión pública iban necesariamente acompañados por una respuesta visible en estas políticas de comunicación y propaganda, y donde los medios de comunicación tenían un rol clave tanto por su llegada y masiva difusión, como también porque semejaban intervenciones desligadas de componentes ideológicos o afines al régimen militar.

58

Este resultado pudo haber sido la razón que propició dos cambios principales en la política comunicacional del gobierno de Viola: por un lado, la utilización estratégica de su imagen difundida en términos de un militar *dialoguista* y *negociador*, dispuesto a establecer nuevas alianzas y corregir errores del pasado; y por el otro, el abandono del proyecto oficial de consolidar el Movimiento de Opinión Nacional en reemplazo de la estructura partidaria, junto al restablecimiento del diálogo con los representantes de los partidos políticos. Sin embargo, ni el cuidado de la *imagen* ni la apuesta al *diálogo*, temas que en algún momento del inicio de la gestión de Viola *medían bien*, pudieron ser utilizados para revertir la situación de un régimen deslegitimado y en pleno derrumbe. No solo no permitieron sortear los conflictos en el frente interno, sino que seguramente fueron un detonante que aceleró la temprana salida de Viola y la llegada de la línea *dura* opuesta al diálogo cívico-militar y a la apertura democrática, representada por el comandante Leopoldo F. Galtieri, quien asumió la presidencia el 11 de diciembre de 1981.